

## **Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia**

Registro de los Estados Unidos 2005-2006

Informe emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

El Perú continuó su transición hacia la democracia. El gobierno del Presidente Alejandro Toledo otorgó una alta prioridad al respeto por la democracia y los derechos humanos y se comprometió a celebrar elecciones libres y equitativas para elegir a su sucesor en el 2006. El Perú cuenta con medios de comunicación diversos y llenos de vitalidad que no se vieron restringidos en sus críticas del gobierno, así como con un sector activo de ONGs que monitorearon estrechamente la situación de los derechos humanos. El gobierno continuó introduciendo reformas en instituciones claves, incluyendo el Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, aunque varios retos quedaron pendientes de resolver. El Perú sufre de altos niveles de pobreza e inequidad y el gobierno se ve limitado en sus acciones por falta de recursos. Existió una creciente impaciencia popular con lo que se percibía como ineficiencia gubernamental y la lentitud con la que los beneficios del crecimiento económico favorecieron a la mayoría de la población. El sistema judicial adoleció tanto de ineficiencia como de corrupción. Las condiciones precarias en las prisiones así como los excesos ocasionales por parte de las fuerzas de seguridad contribuyeron a crear problemas en el área de los derechos humanos. Hubo informes sobre el abuso policial de los detenidos. Hubo violencia contra la mujer y los niños y discriminación contra las personas con discapacidades, los indígenas y las minorías raciales y étnicas. Los defensores de los derechos del trabajador señalaron que las leyes laborales restringieron los derechos a la negociación colectiva. El trabajo infantil continuó constituyendo un grave problema en el sector informal de la economía.

Estados Unidos fomentó la democracia y los derechos humanos en el Perú combatiendo la corrupción; promoviendo la transparencia económica, la descentralización y la reforma judicial; así como fortaleciendo el Congreso Nacional a través del apoyo brindado a grupos dentro de la sociedad civil dedicados a vigilar al Congreso. Estados Unidos apoyó el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del Perú, así como los esfuerzos desplegados para eliminar el trabajo infantil y la explotación sexual de los menores de edad y programas diseñados para promover una participación política más amplia entre los grupos marginalizados. Estados Unidos también apoyó un innovativo programa desarrollado en los colegios estatales para promover una cultura de la legalidad en un esfuerzo de largo aliento por combatir la corrupción que es una debilidad central de la naciente democracia peruana.

Estados Unidos financió actividades en apoyo de la reforma legislativa y la vigilancia del Congreso por parte de la sociedad civil. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, Estados Unidos proporcionó asistencia técnica a fin de incrementar la transparencia legislativa, fortalecer las comisiones del Congreso, perfeccionar la capacidad del Congreso para elaborar una legislación efectiva y mejorar la capacidad de supervisión de los ciudadanos sobre el Poder Legislativo. Estos esfuerzos resultaron en una reducción en el número de comisiones congresales y la creación de un centro para la investigación parlamentaria en el Congreso.

Estados Unidos apoyó a los gobiernos regionales creados en el 2003 mientras que los alcaldes recientemente elegidos asumieron sus funciones, muchos por primera vez en sus vidas. Estados Unidos brindó su apoyo a actividades destinadas a mejorar la transparencia, la participación ciudadana y el rendimiento de cuentas por parte del gobierno. El gobierno del Perú ha hecho significativos avances hacia una mayor descentralización al haber transferido un gran número de competencias y recursos a los gobiernos regionales y municipales. Para setiembre del 2005, 70% de las competencias programadas para ser transferidas lo habían sido y se había transferido el 16% y el 7% del presupuesto nacional, respectivamente, a los gobiernos regionales y municipales. A pesar del fracaso de un referéndum celebrado en el mes de octubre para crear macroregiones conformadas por las regiones existentes, el proceso de descentralización continuó, aún si lo hizo a un ritmo más lento durante este período pre-electoral.

En el 2005, el gobierno de los Estados Unidos continuó brindando su apoyo al Consejo Nacional de Descentralización y extendió la disposición sobre el apoyo técnico a todos los 537 gobierno locales ubicados en San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho y Cusco. Esta asistencia incluyó tareas de capacitación y elaboración de presupuestos, participación ciudadana en decisiones presupuestarias y supervisión de los gastos presupuestados. El Fondo de Incentivo Especial, creado el año pasado por los Estados Unidos, otorgó sus primeras adjudicaciones este año a cada una de las 17 municipalidades. Estas adjudicaciones sirven para co-financiar proyectos de infraestructura a pequeña escala y benefician a los gobiernos municipales.

Perú es uno de cuatro países que participan a nivel mundial como país piloto en la iniciativa anticorrupción y pro transparencia del G-8. Los fondos, incluyendo las contribuciones de los Estados Unidos, fueron destinados a apoyar la implementación del acuerdo entre el G-8 y el Perú. Como parte del acuerdo con el G-8, el gobierno de los Estados Unidos también prestó su apoyo a la iniciativa planteada por el Consejo Superior para las Adquisiciones Estatales del Perú para crear una Institución para las adquisiciones gubernamentales a nivel de la

Organización Interamericana, a fin de promover una mayor transparencia en las prácticas de adquisiciones de los gobiernos regionales del Hemisferio Occidental. Durante todo el 2005, Estados Unidos brindó su apoyo al desarrollo del Poder Judicial. Como resultado de la ayuda ofrecida por los Estados Unidos, el número de jueces permanentes creció a más del 90 por ciento. Adicionalmente, en el mes de abril, el Poder Judicial creó juzgados comerciales especializados, los mismos que han contribuido a reducir el tiempo promedio que toma procesar una causa de dos años a dos meses. El tiempo promedio necesario para hacer cumplir los fallos en juicios de naturaleza comercial se redujo de tres años a menos de seis meses.

Estados Unidos promovió otras reformas en diversas áreas. El Ministerio de Educación incorporó de manera oficial en su currículum nacional una clase sobre "valores y ciudadanía" sustentada por un programa financiado por los Estados Unidos que promueve una cultura de legalidad.

Se llevaron a cabo un conjunto de programas de extensión y toma de conciencia entre la población, entre ellos los Programas de Visitantes para el Liderazgo, oradores y conferencias de video públicas con la participación de expertos estadounidenses y peruanos, la promoción de una mayor conciencia entre la población sobre temas judiciales, la transparencia, los costos de la corrupción, las relaciones raciales y étnicas y los derechos de la mujer.

Estados Unidos también financió la capacitación de miembros de la Policía en el área de derechos humanos y el control no-letal de las muchedumbres. A fin de establecer una presencia policial en el oriente andino, donde se cultiva la coca ilegal, Estados Unidos financió tres academias especiales de donde se graduaron 400 nuevos oficiales de la Policía en el 2005. Todas las misiones de capacitación militar entre los Estados Unidos y el Perú incorporaron la capacitación en el área de derechos humanos. Adicionalmente, el Grupo de Asistencia Militar auspició varios seminarios en los que participaron tanto militares como civiles y en los que se trataron temas directamente relacionados con la democracia, incluyendo las relaciones entre civiles y militares, el control civil de los militares, la reforma de la justicia militar y aspectos legales de la lucha contra el terrorismo.

Estados Unidos ayudó a financiar los esfuerzos desplegados para implementar las recomendaciones de la CVR. Estados Unidos continuó brindando su apoyo para los proyectos iniciados en el 2004, incluyendo, el apoyo ofrecido al Defensor del Pueblo para abrir un centro de documentación. Estados Unidos también apoyó las actividades de las ONGs destinadas a eliminar las órdenes de arresto que no contaban con la debida sustentación en casos de terrorismo y a proporcionar un tratamiento psicológico a víctimas de la violencia y la tortura.

La Embajada de los Estados Unidos jugó un papel activo en la promoción de los derechos humanos. En el mes de mayo del 2005, la periodista británica Sally Bowen fue encontrada culpable de difamación por haber citado a una fuente que señaló que el jefe mafioso Fernando Zevallos era un narcotraficante. El Embajador se pronunció en contra del fallo judicial, uniéndose a otros embajadores y defensores de la democracia y la libertad de prensa peruanos en su protesta contra este error judicial. Posteriormente, el fallo fue revertido, el juez de la causa suspendido y Fernando Zevallos recibió una sentencia que lo envió a prisión por narcotráfico.

Luego de que el ex Presidente de la CVR, Salomón Lerner, recibió amenazas contra su vida, el Embajador ofreció un almuerzo público sumamente notorio para los miembros de la CVR. A este almuerzo concurrieron otros miembros de la comunidad diplomática para mostrar su apoyo y preocupación por la seguridad de este eminente activista en el área de los derechos humanos y por la de sus colegas.

La Embajada también apoyó y monitoreó programas estadounidenses destinados a combatir el trabajo infantil en Lima y en el sector minero. Estados Unidos financió diversos programas en apoyo de los esfuerzos desplegados por ONGs peruanas para implementar programas contra la trata de personas en colaboración con el gobierno. Estos programas incluyeron el desarrollo de una base de datos estadísticos y una capacitación policial relacionada con este esfuerzo diseñada para hacer un seguimiento de los casos de trata de personas, así como el desarrollo de campañas para promover legislación adicional y una mayor toma de conciencia entre la población sobre este tema de vital importancia dentro del área de los derechos humanos. El 27 y 28 de abril, el gobierno del Perú y la OEA sirvieron de anfitriones para un seminario internacional sobre "La Lucha contra la Trata de Personas", en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos.